

Armellino, Martín. **Algunas diferencias al interior del campo popular: la experiencia reciente de la CTA y la FTV.** Informe final del concurso: Poder y nuevas experiencias democráticas en América Latina y el Caribe. Programa Regional de Becas CLACSO. 2004

Disponible en la World Wide Web:

<http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/becas/2003/poder/armellino.pdf>

www.clacso.org

RED DE BIBLIOTECAS VIRTUALES DE CIENCIAS SOCIALES DE AMERICA LATINA Y EL  
CARIBE, DE LA  
RED DE CENTROS MIEMBROS DE CLACSO  
<http://www.clacso.org.ar/biblioteca> - [biblioteca@clacso.edu.ar](mailto:biblioteca@clacso.edu.ar)

## **Algunas diferencias al interior del *campo popular*: la experiencia reciente de la CTA y la FTV**

Martín Armellino\*

### **Introducción**

En el marco de las transformaciones estructurales de los '90 se constituyeron la Central de los Trabajadores Argentinos (CTA) y, en su interior, la Federación de Tierra, Vivienda y Hábitat (FTV). La creación de esta última, a mediados de 1998, permitió la incorporación a la CTA de agrupaciones y organizaciones representativas de los sectores populares, pero estableció también la vinculación de sectores y actores con distintos intereses, sistemas de prácticas y metas que difieren en muchos aspectos. Aún con estas diferencias, ambas han compartido un trasfondo común de resistencia a las transformaciones económicas y sociales profundizadas en los '90, que se ha expresado en la realización de protestas (marchas, paros, piquetes, etc.) y, en estos últimos años, en la marcada orientación de sus acciones hacia la instauración de un proyecto político que reintegre a amplios sectores desafiliados del régimen social de acumulación y el régimen político de gobierno. Los dos conjuntos de reclamos que han concentrado la impronta social y política de estas organizaciones, en ese sentido, han sido la redistribución de la riqueza y la ampliación de los mecanismos de participación y decisión política, respectivamente. Uno y otro han canalizado, en estos años, la intención de los dirigentes de la CTA y de la FTV de incidir en el escenario político que, en el contexto de la crisis de legitimidad y del ciclo de movilización dados a fines de 2001, se acrecentó hacia la búsqueda de un renovado protagonismo de parte de distintos actores sociales.

Esta búsqueda de una mayor gravitación se desarrolló paralelamente al cuestionamiento de ciertas prácticas y actores principales del régimen político de gobierno: los partidos y sus figuras más prominentes. Dicha impugnación se vincula con algunos de los aspectos elementales de una democracia representativa.

En efecto, hay dos planos complementarios desde los cuales se puede considerar el desenvolvimiento de un régimen democrático. El primero refiere al conjunto de reglas

procedimentales que organizan el juego político mediante la celebración de elecciones periódicas en las que la ciudadanía selecciona de entre distintas ofertas partidarias a quienes tomarán parte en los procesos de decisiones legislativas y administrativas. Esta aproximación formal, no obstante, no es suficiente para comprender un proceso político determinado. Para ello hay que atender a un segundo plano, referido a las prácticas concretas producidas y reproducidas por los actores que se valen, negocian y dan sentido a aquel conjunto de reglas formales (Nun, 1989: 105).

Esta complementariedad de planos, tratada por José Nun<sup>1</sup> en su análisis de los regímenes democráticos de América Latina, es sustantiva para nuestro trabajo porque nos permite enmarcar los mecanismos aprovechados (o no), las prácticas producidas y las estrategias adoptadas por la CTA y la FTV para influir en la ampliación del espacio de democratización del régimen político de gobierno argentino.

Brevemente, el autor critica una de las premisas que, desde el contractualismo en adelante, ha estado presente en la teoría política liberal: la división entre la esfera política y la esfera civil. En tanto la primera retuvo el contenido político reducido al estado, un conjunto de relaciones sociales decisivas, como las producidas en la economía, fueron despojadas de ese carácter. “Perdía así visibilidad adecuada el difícil trabajo político de elaboración y de transformación de las imágenes particulares que dan una unidad siempre conflictiva a esas prácticas” (1989: 122). Es por ello que lo público está jalonado por una complejidad que excede estos cortes: las interacciones económicas están mediadas por la acción estatal que organiza un entramado denso de reglas y normas que condicionan las prácticas de aquellas. Es en este registro que la CTA ha buscado influir en el espacio público-político para modificar rasgos de estas interacciones.

Para designar a este tipo de relaciones, Nun ha propuesto el término *régimen social de acumulación*, que refiere al conjunto heterogéneo de prácticas, interpretaciones e instituciones intervinientes del proceso de acumulación de capital, y que les garantiza a los agentes económicos niveles mínimos de coherencia para operar. La composición, los rasgos y la extensión de un régimen se modifican históricamente de un contexto a otro y está atravesado por contradicciones con diferentes grados de conflicto. De ello resulta indispensable la articulación que realizan la política y la ideología. “Por eso tal régimen puede ser concebido como una matriz de configuración cambiante en cuyo interior se van entrelazando estrategias específicas de acumulación y tácticas diversas para implementarlas, de modo que la acumulación de capital acaba siendo el resultado contingente de una dialéctica de estructuras y de estrategias” (1989: 123).

Como fenómeno histórico de mediano y largo plazo, un régimen social de acumulación abarca múltiples dimensiones. Pueden distinguirse, analíticamente, tres momentos: el de emergencia; el de consolidación y expansión; y el de agotamiento y decadencia, que puede (o no) conducir a una crisis generalizada. Dice Nun: “En la medida en que se estabiliza un régimen social de acumulación se incrementa la fuerza inercial de sus imágenes y modos de institucionalización, por más que esto nunca cancele la problematicidad de aquella dialéctica de estructuras y de estrategias. Típicamente, tales imágenes y modos de institucionalización tienden a naturalizarse y una particular organización del mercado o de las relaciones entre el

capital y el trabajo ingresan, entonces, al sentido común de los agentes económicos; cuando esto sucede, cualquier intento por modificar el régimen es presentado ideológicamente por los defensores del *status quo* como una interferencia política –y no como lo que realmente es: una movida de piezas en el juego político del cual todos son parte” (1989: 123).

Mediante este movimiento analítico se discute aquella noción de la economía como sistema autónomo de estrategias y prácticas que busca correr de la discusión política un conjunto de interacciones que, paradójicamente, generan un haz de demandas populares que sí ingresan a ese debate (1989: 128). La concepción de un régimen político democrático supone, en esta perspectiva, no sólo la convocatoria pautada de consultas electorales sino también el aprendizaje efectivo de la democracia por medio de la participación plural y mayoritaria de numerosos actores que naturalicen prácticas e interacciones alternativas. Si la posibilidad de que distintos actores practiquen y gocen de sus derechos genuinamente se ve condicionada ostensiblemente –como se ha venido profundizando en estos años en la Argentina– lo que se pone en entredicho es el conjunto de reglas formales que orientan y regulan estas acciones. “(...) si las decisiones que surgen del juego democrático no son las que en gran medida rigen la vida de la comunidad, aquel ineludible aspecto formal del régimen degenera en un mero formalismo y la democracia representativa se convierte en un simulacro” (1989: 105).

La abrupta finalización del gobierno de Fernando de la Rúa, a fines de 2001, mostró en ese sentido el distanciamiento entre los múltiples reclamos ciudadanos elevados por numerosos actores surgidos a lo largo de los '90 y la reducida capacidad estatal para resolverlos, en un contexto de marcada depresión económica y de fragmentación social. Este proceso de corrimiento del estado ha mostrado una de sus mayores insuficiencias respecto del tratamiento de la cuestión social.

Con esta referencia nos desplazamos hacia un estudio ejemplar sobre dicha cuestión, realizado por Robert Castel para el caso francés. El autor sostiene que lo social está regulado por sistemas distintos de los del mercado, que completan la brecha dada entre la organización política y el sistema económico. Esta problemática cobra especial atención, actualmente, porque surge “en los márgenes de la vida social, pero ‘pone en cuestión’ al conjunto de la sociedad” (1997: 23). Así, el planteo de la “nueva cuestión social” busca averiguar cuáles son las posibilidades para reintroducir a quienes han sufrido un proceso de desafiliación social y que amenaza dejar exangüe a todo el conjunto. Con el término desafiliación social, Castel alude al derrotero que ha ido degradando a los sistemas que protegían al trabajador de distintos riesgos y buscaban cerrar la brecha entre la organización política y el sistema económico de la “sociedad salarial”, establecido entre las décadas de 1930 y 1970. Ese sistema de protecciones, propio del modelo fordista de producción industrial, incorporó al ámbito fabril a gran cantidad de trabajadores y estableció parámetros de socialización de los sectores populares, principalmente, estructurando prácticas, tradiciones e identidades en torno al trabajo en general, y al gremio que los representaba en particular.

La constitución de la CTA y de la FTV bien pueden interpretarse, entonces, como el resultado de estas dos cuestiones planteadas hasta aquí someramente: la emergencia de nuevos actores que, en un doble movimiento, buscan restablecer lazos mínimos de

sociabilidad frente al corrimiento estatal del tratamiento de lo social, y pujan por protagonizar activamente los procesos de representación, deliberación, participación y decisión en el régimen político de gobierno.

Las distintas coyunturas sucedidas luego de la abrupta finalización del gobierno de Fernando de la Rúa, a fines de 2001, condicionaron el accionar de los actores sociales y políticos. En ese contexto, la movida de piezas al interior del juego político cristalizó algunas diferencias entre estos actores. Un ejemplo de ello ocurrió al interior de la CTA, con la FTV. Las discrepancias entre ambas se plasmaron, sobre todo, en el tipo de relación mantenida con los gobiernos nacionales sucedidos desde entonces y con distintas agencias estatales. Pero, en realidad, dichas diferencias son expresiones de un conjunto de tensiones constitutivas del vínculo asumido entre ellas. A explorar esas tensiones y su manifestación en diferentes estrategias y prácticas desde fines de 2001 hasta principios de 2004 está abocado este trabajo.

Debido a las condiciones y consecuencias que el proceso político enmarcado en este período le imprimió a organizaciones sociales como éstas, nuestro análisis de las tensiones y diferencias entre CTA y FTV quedará circunscripto a la manera en que participaron de la recomposición institucional del régimen político de gobierno. Así, nuestra referencia a la CTA y a la FTV tomará en cuenta, particularmente, el punto de vista de los dirigentes y miembros que ocupan cargos con distinto grado de jerarquía en estas organizaciones, porque consideramos que es desde esos espacios de gravitación a nivel organizativo y de proyección política que se plantean las estrategias y se toman las decisiones para influir en el espacio público-político.

¿Cómo abordar, entonces, esta cuestión? ¿Por medio de qué herramientas teórico-metodológicas podemos explorar esta compleja trama de actores y condicionamientos estructurales atendiendo al proceso y desenvolvimiento de los acontecimientos políticos de estos años? A partir de la teoría de la estructuración, de Anthony Giddens, buscaremos comprender y explicar este derrotero. Según el autor: “Las actividades humanas sociales, como ciertos sucesos de la naturaleza que se auto-reproducen, son recursivas. Equivale a decir que los actores sociales no les dan nacimiento sino que las recrean de continuo a través de los mismos medios por los cuales ellos se expresan *en tanto* actores. En sus actividades, y por ellas, los agentes reproducen las condiciones que hacen posibles esas actividades” (1998: 40. Subrayado en el original). No obstante la forma recursiva de las actividades sociales, los actores proyectan sus intenciones en esas actividades. De modo que, en la concepción de Giddens, el carácter intencional de las conductas humanas está mediado por una *racionalización de la acción* o un *registro reflexivo*, que posibilitan el reconocimiento de las propias acciones y las de los semejantes, como también los componentes sociales y físicos de los contextos de interacción.

Para dar cuenta de la cognoscibilidad de los actores sociales hay que prestar atención a dos niveles en que éstos son capaces de conocer el mundo cotidiano que los rodea y que ellos contribuyen a reproducir. Por un lado, el nivel de la *conciencia práctica* de la cognoscibilidad, que refiere a un tipo de conocimiento tácito, forjado en la recursividad misma de esas prácticas y aplicado para ejecutar distintos cursos de conducta, pero que el agente

no puede expresar discursivamente, no puede ofrecer razones; es decir, *sabe* cómo realizarlo pero no lo puede argumentar en palabras. Por otro lado, está el nivel de la *conciencia discursiva* de la cognoscibilidad que sí permite al agente dar razones sobre su conducta. Esta distinción es importante para evaluar los argumentos ofrecidos por los dirigentes de las organizaciones acerca del desenvolvimiento de la CTA y la FTV entre 2001 y 2004, como también para indagar en el tipo de saber mutuo que los mueve a actuar en uno u otro sentido<sup>2</sup> y que se ven imposibilitados de ofrecer razones sobre porqué realizaron una acción determinada y no otra.

Ahora bien, en el complejo entramado de prácticas sociales recursivas e intenciones que motivan a la acción se instala la tensión entre la reproducción de un conjunto de prácticas y la producción de otras nuevas o que, cuando menos, modifican a aquellas. ¿Por qué ocurre esto? Porque el agente puede “actuar de otra manera”, esto es, puede hacer uso de su capacidad para intervenir en el mundo y producir cambios en torno de las prácticas que reproduce. Dice Giddens: “(...) una acción nace de la aptitud del individuo para ‘producir una diferencia’ en un estado de cosas o curso de sucesos preexistentes. Un agente deja de ser tal si pierde la aptitud de ‘producir una diferencia’, o sea, de ejercer alguna clase de poder” (1998: 51). A partir de esa definición es que el autor establece un vínculo estrecho entre la noción de acción y la de poder: “(...) podemos decir que acción implica lógicamente poder en el sentido de aptitud transformadora. En esta acepción de ‘poder’, que es la más amplia, el poder es lógicamente anterior a la subjetividad, a la constitución del registro reflexivo de la conducta” (1998: 52).

La cognoscibilidad de los agentes está contextualizada en un tiempo y un espacio por las *condiciones no reconocidas de la acción* y por las *consecuencias no deseadas*. Estos términos refieren a los resultados producidos más allá de los proyectados intencionalmente por el actor. Así, las consecuencias no deseadas de un haz de acciones se convierten sistemáticamente en condiciones no reconocidas que harán las veces de marco para las motivaciones e intenciones de futuras acciones. Las consecuencias no deseadas que la agencia genera ayudan a transformar las condiciones de reproducción de las prácticas sociales que orientan nuevas formas de actuar y, en un plano más general, favorecen al cambio social. De este modo, las intenciones de los agentes cobran sentido y se plasman en el marco de instituciones sedimentadas a lo largo del tiempo.

Con esta mención nos desplazamos hacia los términos centrales de la teoría de Giddens: *estructura*, *sistema social* y *estructuración*. Brevemente, la estructura cristaliza en las propiedades que hacen posible que un conjunto de prácticas sociales se recreen en forma sistemática durante un lapso prolongado en el tiempo y el espacio. El sistema social, por su parte, involucra las relaciones materiales, concretas, reproducidas entre los actores, que están organizadas como prácticas sociales regulares en un espacio-tiempo. La estructuración de un sistema social, por último, cobra sentido en la medida que permite analizar el modo en que ese sistema es reproducido y producido por actores situados en contextos donde se aplican las reglas y recursos que lo configuran<sup>3</sup>.

¿Cómo –se pregunta Giddens– debe concebirse la vinculación entre acción y estructura? Reconociendo la dualidad inherente a la reproducción social, que él denomina *dualidad de la estructura*. Esta noción liga los tres términos de la Teoría de la estructuración

y señala el carácter recursivo de la realidad social. En efecto, al presentarse como propiedades de los sistemas sociales, la estructura no sólo constriñe –tal como se pensó desde el estructuralismo– sino que también habilita a la acción. Esto es así por dos rasgos principales que asume la estructura en esta teoría: uno alude a su virtualidad; otro, apunta al hecho que es tanto medio como resultado de las prácticas que ella organiza recursivamente.

Que la estructura tenga una existencia virtual indica que existe como el conjunto de propiedades estructurales de los sistemas sociales. Para ejemplificarlo, Giddens (1982) toma la lingüística. En efecto, cuando pronunciamos cualquier enunciado recurrimos a un corpus ausente de reglas sintácticas y semánticas. Las relaciones sintagmáticas –es decir, el valor que las palabras adquieren de acuerdo al orden del sentido gramatical– presentes en cada enunciación se hallan en un espacio y un tiempo determinado, pero las propiedades estructurales del lenguaje que posibilitan los enunciados y las enunciaciones de todo tipo no. Estas últimas tienen una existencia virtual, es decir, se hacen presentes cuando hablamos. Así, la relación entre una emisión u oración y el lenguaje no es comparable con la que existe entre un órgano del cuerpo y el organismo como un todo, sino que es una relación de presencia y ausencia. Dice Giddens: “En el análisis de relaciones sociales tenemos que admitir tanto una ‘dimensión sintagmática’, el diseño de relaciones sociales en un espacio-tiempo que incluye la reproducción de prácticas situadas, como una ‘dimensión paradigmática’ que incluye un orden virtual de ‘modos de articulación’ implicados de manera recursiva en aquella reproducción” (1998: 53).

Que, por otra parte, la estructura sea tanto medio como resultado de las prácticas, responde a lo siguiente: es medio porque no podría pensarse una agencia social que no se realice en un contexto de sentido previo, otorgado por las propiedades estructurales de determinado sistema social. Dicho de otra forma, los agentes sociales no pueden crear realidad social de la nada, en todo caso, por medio de la estructura se va transformando lentamente en el tiempo y el espacio un conjunto de prácticas que hasta un momento se reprodujeron de un determinado modo y paulatinamente fue variando hacia otro. Esto, claro está, se ve posibilitado por la capacidad de actuar de otra manera de los agentes, pero siempre echando mano a los recursos y considerando las reglas que orientan su acción. Pero la estructura es también resultado porque es reproducida y reactualizada en tanto los agentes hacen uso de las reglas y recursos de que dispone dicho sistema como propiedades estructurales de sus prácticas e instituciones. Nuevamente, el ejemplo de la lingüística es claro: en cada emisión u oración se utiliza un conjunto de reglas sintácticas, sedimentadas en la conciencia práctica que tiene el agente del lenguaje. Esas características del lenguaje constituyen el medio por el cual los agentes se comunican entre sí, pero al mismo tiempo que posibilitan la comunicación, con cada emisión los agentes reproducen y actualizan el lenguaje como un todo.

Finalmente, esta dualidad se manifiesta, también, en las relaciones entre actores en torno de la cuestión del poder. Si un sistema social se constituye de prácticas organizadas regularmente a través del tiempo y el espacio, y a través de ellas los actores reproducen la estructura como propiedades de los conjuntos de reglas y recursos que rigen el desenvolvimiento de dicho sistema, los recursos no son otra cosa que los medios de los que el poder se sirve para la reproducción social. El poder en los sistemas sociales involucra

relaciones de autonomía y dependencia en la interacción social, particularmente si se reconoce la existencia de relaciones desiguales de poder y dominación entre los actores o colectividades. En estas relaciones se plantea una *dialéctica del control* que supone la capacidad de que quienes están subordinados puedan sin embargo condicionar e influir a sus superiores. Estas relaciones regularizadas de autonomía y dependencia son recíprocas: extienden la distribución desigual de recursos involucrados e instalan el control de los menos poderosos sobre los más.

En suma, este enfoque teórico cobra especial interés para explicar comprensivamente un proceso social determinado sin que haya preeminencia del aspecto estructural o del aspecto intencional de la acción. En nuestro caso, nos permitirá abordar las prácticas, modos tácitos de conocimiento, estrategias y objetivos de la CTA y la FTV, teniendo en cuenta el punto de vista de los dirigentes sobre sus intenciones sin descuidar los condicionamientos estructurales de las coyunturas políticas en las que aquellas surgieron. Entre esos dos puntos extremos del análisis, el proceso dentro del cual la CTA y la FTV buscaron capitalizar su protagonismo social en político mediante distintas interacciones con otros actores principales del juego ocupa las secciones siguientes de este trabajo. En primer lugar, se presentará una breve historia de cada organización, y se establecerán las tensiones constitutivas de ese vínculo; luego, se desarrollarán dichas tensiones en las coyunturas sucedidas entre fines de 2001 y 2004; por último, se apuntarán algunas conclusiones tentativas.

### **Reconstrucciones históricas**

#### *Desde el Congreso a la Central de los Trabajadores*

Con el gobierno peronista de Carlos Menem (1989-99), se profundizó el agotamiento del régimen social de acumulación inclusivo, transcurrido entre mediados de los '40 y mediados de los '70, y basado en el modelo de sustitución de importaciones y la predominancia del mercado interno. En efecto, se avanzó en una línea de cambios estructurales que habían comenzado a gestarse bajo la última dictadura militar (1976-83). Estos cambios contemplaron la desregulación y apertura de la economía, la privatización de empresas públicas, el incremento de la presión impositiva, la reforma administrativa -sobre todo la reducción de empleados públicos y la reorientación de los recursos públicos- y la flexibilización del mercado de trabajo. En 1991, el Plan de Convertibilidad, que buscaba estabilizar el tipo de cambio en la paridad del peso con el dólar, terminó de completar el complejo de medidas que transformaron el régimen social de acumulación<sup>4</sup>. El gobierno de la Alianza UCR-Frepaso (1999-2001) mantuvo, en líneas generales, la política económica de la gestión precedente y continuó con la aplicación de medidas de corte ortodoxo que, de acuerdo con Basualdo (2002: 93), mostraron la incidencia de la valorización financiera en la orientación del estado, por cuanto se abandonó el impulso y la planificación del desarrollo económico como lineamiento general y se dejó de garantizar el crecimiento y una conducción mínima del proceso económico. Así, la capacidad regulatoria estatal necesaria en un régimen social de acumulación de capital fue transferida al capital oligopólico.

El fin del antiguo modelo debilitó drásticamente el poder sindical en el juego político. Como señalan Svampa y Pereyra (2003), por un lado, los sindicatos tradicionalmente peronistas perdieron la hegemonía de otros años, que en adelante sería retenida principalmente por el Partido Justicialista (PJ); por otro lado, la posibilidad de que los sindicatos consiguieran mejoras económicas y laborales a partir del arbitraje estatal se vio limitada, debido a la puesta en marcha de una reestructuración industrial y de diferenciación de empresas que dificultaron las estrategias de negociación colectiva por rama de actividad a nivel nacional y redujeron la capacidad de los sindicatos para mantener los salarios de los trabajadores. El sistema de relaciones laborales fue afectado, además, por el deterioro de los mecanismos de negociación colectiva centralizada y la expansión de los acuerdos entre empresarios y trabajadores en el ámbito de las empresas. La modificación del marco legal para la contratación de trabajadores y la descentralización de los convenios colectivos llevó a reformular estrategias tanto de parte de los sindicatos como de los empresarios. Esto se profundizó junto con el incremento de la tasa de desempleo y la emergencia de la desocupación como problema estructural.

Los sindicatos que más sufrieron estos cambios fueron aquellos vinculados a la industria y a las dependencias del estado. En este marco, surgieron nuevas expresiones sindicales que buscaron redefinir su espacio de inserción social y político y, en consecuencia, redefinieron también su vinculación con respecto a la identidad peronista. Así fue como se conformó, en torno de los estatales (ATE) y los docentes (CTERA), entre otros gremios, el entonces Congreso de los Trabajadores Argentinos (CTA) que años más tarde se establecería como una nueva central<sup>5</sup>.

Estos gremios, que habían estado vinculados a la contestataria CGT-Azopardo de Saúl Ubaldini en tiempos del gobierno de Alfonsín, produjeron varias de las movilizaciones que impugnaron las reformas en curso y encontraron en la protesta una vía de resistencia ante esas transformaciones y una clara señal de distanciamiento con respecto a la CGT, que mostraba un considerable nivel de desmovilización como aspecto clave de adaptación al nuevo contexto económico y político.

Uno de los objetivos fundantes de la CTA, liderada por el estatal Víctor De Gennaro, fue la elaboración de un estatuto que distinguiera a la nueva organización del modelo sindical tradicional y que promoviera un espacio de incorporación y representación de los nuevos actores sociales surgidos con los cambios dados en el régimen social de acumulación. El estatuto promueve: 1) Autonomía sindical respecto del estado, de los partidos políticos y de los grupos económicos; 2) Democracia sindical; y 3) Apertura a otras organizaciones sociales que expresan las demandas de los sectores populares.

La autonomía sindical respecto de los partidos refiere particularmente a la relación orgánica que ligó a los sindicatos de la CGT con el PJ, respecto del estado señala un límite al papel relevante que éste alcanzó en la reconfiguración del movimiento sindical, sobre todo a partir del primer gobierno de Juan D. Perón, y respecto de los grupos económicos marca el cambio que, tras las reformas, impidió alcanzar los acuerdos sociales entre sindicatos y patrones característicos del antiguo modelo, porque se privilegiaba el mercado interno y cobraba importancia la puja salarial y su vinculación con la demanda y el consumo. Respecto



del segundo punto, la democracia sindical, se respalda la elección directa de la conducción en sus distintos niveles (nacional, provincial, local) por medio del voto directo de cada afiliado, siendo que toda organización de tercer grado como la CTA no puede apelar al voto por afiliado sino por medio de organizaciones de segundo grado. Finalmente, y vinculado con el punto anterior, respecto de la apertura a otras organizaciones, se busca incorporar a aquellos actores que aparecieron como consecuencia de las transformaciones y expresan el creciente espacio de fragmentación de los sectores populares. En este sentido, el planteo de la CTA es que una nueva central de trabajadores no puede sostenerse únicamente con la organización de los trabajadores formales. Por lo tanto, el sindicato no puede ser la única representación organizativa que debe adoptar el movimiento de los trabajadores.

Por ello, se promovió la conformación de federaciones a través de las cuales pudieran tener cabida seccionales sindicales y/o trabajadores alejados de la CGT, como también desocupados y demás organizaciones sociales cuya representación la CGT no contempla. Fueron creadas, entre otras, la FeTIA (Industria y Afines), la FNS (Salud y Seguridad Social), la FeTERA (Energía) y la FTV (Tierra, Vivienda y Hábitat).

Ahora bien, pese a que la CTA ha incorporado a organizaciones sociales de distinto tipo, mantiene una fuerte tradición de militancia sindical, mayoritariamente peronista. Sus dirigentes provienen de las filas de gremios como estatales, docentes, judiciales, trabajadores de prensa, de la salud, de distintas ramas de la industria, entre otros. Se trata, entonces, de dirigentes y militantes de base cuyas historias expresan la de un tipo de trabajador en relación de dependencia, amparado por una serie de regulaciones legales – devaluadas en su alcance pero existentes aún– que le aseguran un salario para su consumo privado y una serie de instrumentos de protección y asistencia social que lo incluyen dentro de los sectores medios y medios bajos. Es decir, son militantes y dirigentes que han experimentado el proceso ascendente de movilidad social, o que han tenido tan sólo la expectativa, pero que en conjunto han resistido al proceso de pauperización del empleo, de reducción de ingresos, de profundización de los procesos de desafiliación, desigualdad, pobreza y retirada del estado en cuanto a asistencia social, que incrementaron en los '90 la polarización y fragmentación social.

De esa manera, las estrategias de construcción de la CTA se han orientado a contemplar estos cambios y han caracterizado, en ese sentido, el modo en que esta organización acrecentó su caudal de afiliados. No obstante, la consecuencia no deseada de dicha construcción fue la aparición de una serie de dificultades que cristalizaron diez años después de su formación y que queremos describir en este trabajo. Por un lado, hay una marcada impronta de sus dirigentes por mantener una tradición social y política propia del sindicalismo tradicional, que se expresa en el sustrato de su militancia, en el tipo de reclamos y propuestas realizados y en las formas de expresarlos ante el estado, la mayoría de las veces, nacional. Esto se debe a dos factores: el primero está relacionado con aquella tradición, propia del régimen de acumulación mercadointernista y proteccionista, en la cual el estado arbitraba las relaciones entre el capital y el trabajo, y los sindicatos encontraban en aquél respuestas concretas a sus reclamos; el segundo está relacionado con el liderazgo predominante en la CTA de ATE, el sindicato representativo de los empleados estatales, con lo cual una amplia escala de sus acciones está orientada por el acervo de conocimiento que

la tradición sindical estatal le ha impuesto a sus dirigentes. Pero, por otro lado, hay asimismo una decidida intención de innovar en el tipo de organización y representación de los trabajadores, y en esa dirección hay que observar la incorporación en sus filas de sectores que vienen sufriendo los procesos de desafiliación social, desocupación, pobreza, polarización y fragmentación social. La creación de la Federación de Tierra Vivienda y Hábitat (FTV) es un claro ejemplo de esta característica de construcción.

Estos aspectos peculiares de la CTA deben ser puestos en relación con un objetivo de largo plazo de la organización, que fue trazado ya en sus comienzos, a fines de 1992, y que tiene que ver con la constitución de un movimiento social y político como herramienta para el cambio social<sup>6</sup>. En esa dirección, la CTA creó el Instituto de Estudios y Formación (IDEF) que dirige el economista y actual diputado nacional Claudio Lozano, desde el cual se han venido produciendo estudios sobre las transformaciones económicas y sociales de los '90, y se han elaborado proyectos para modificar la regresiva distribución de ingresos, la concentración de la riqueza, el incremento de la pobreza, la indigencia y el hambre. Desde allí se ha promovido, además, la posibilidad de instrumentar el presupuesto participativo en Argentina o la conformación del Frente Nacional contra la Pobreza (Frenapo), durante 2001, para realizar una consulta popular sobre la creación de un Seguro de Empleo y Formación para todos los jefas o jefes de familia desocupados. La realización de dicha consulta popular, a fines de diciembre de ese año, constituyó un emprendimiento político de envergadura para la CTA en la medida que logró organizar, coordinar y liderar una acción colectiva tendiente a mejorar la situación material de los sectores populares, pero también inclinada a la ampliación de los procesos de participación política, junto con la colaboración de distintos partidos políticos y organizaciones sociales. En esa dirección, la CTA mostró la capacidad de ligar un tipo de acción contenciosa mediante la movilización con otro tipo de acción tendiente a democratizar los espacios de participación y decisión sobre la distribución de la riqueza, porque planteó una propuesta de solución posible para paliar la desocupación y la pobreza, a la vez que experimentó la formación de un frente que podía constituirse en la base desde la cual construir el mentado movimiento.

No obstante, este tipo de construcción política adquiere relevancia en tanto incide en el proceso de reconfiguración de las identidades políticas dado en los últimos lustros. Si la CTA ha conformado un espacio en el que tienen representación distintos sectores, en esa operación también se han resignificado –y en algunos casos han entrado en pugna– distintas tradiciones sociales y políticas. Esto se debe, entre otros factores, al lugar que ocupa la identidad peronista entre sus afiliados. En efecto, predomina en la CTA esta tradición política, pero hay también espacio para sectores de izquierda (en sus distintas vertientes, desde el Partido Socialista hasta el Partido Comunista), del radicalismo –aunque muy pocos– y de la militancia social y cristiana. Si bien es cierto que este aglutinamiento variado de organizaciones e identidades expresa la tensión inherente a la construcción de un nuevo movimiento, en un contexto de resignificación de identidades políticas, no lo es menos que esa tensión dificulta su consolidación, sobre todo si ella depende principalmente de una organización sindical que no termina de definir si sólo participa en el juego político como una central de trabajadores que lo impugna o si accede a participar, adaptándose a las reglas y prácticas que ese juego dispone. La CTA enfrentó la salida de la crisis política de 2001-2 y el escenario establecido con el gobierno de Kirchner en medio de esa disyuntiva; la parálisis

política de la organización ha mostrado los límites existentes entre la participación como organización social contestataria y la participación político-electoral en dicho juego.

#### *Del asentamiento al origen de la FTV*

Aunque la Federación de Tierra, Vivienda y Hábitat (FTV) se constituyó en julio de 1998, varias de las organizaciones que la componen tienen una historia que se remonta hacia fines de los '70 y principios de los '80. Su formación recoge, así, la trayectoria de agrupaciones con un tipo de trabajo comunitario y de organización territorial ligados a la problemática del subempleo y el desempleo, la desafiliación social y la pobreza, la vivienda y el hábitat de grandes contingentes de los sectores populares que sufrieron el proceso de pauperización instalado con la desindustrialización creciente del conurbano bonaerense, desde fines de los '70, y que se profundizó en los '90. En esa zona, densamente poblada, la escasez de viviendas y las condiciones habitacionales son problemas acuciantes. Ante la falta de respuesta estatal, la solución adoptada por los propios habitantes fue la toma de tierras ilegales, muchas de las cuales se convirtieron luego en asentamientos y barrios. Paradójicamente, ese tipo de acción colectiva directa fue clave para la estructuración de un sistema de prácticas propio del trabajo comunitario para la gestión y resolución de los problemas y necesidades barriales.

Uno de los asentamientos, convertido en barrio tiempo después y que desarrolló un sostenido trabajo comunitario y territorial, es El Tambo<sup>7</sup>, ubicado en el partido de La Matanza. De acuerdo con Merklen (1991), El Tambo surgió en 1986 y sus habitantes pertenecían a los sectores populares pobres y medios empobrecidos. El trabajo comunitario en el territorio buscaba consolidar la organización que planificó la toma de tierras tanto para fortalecer lazos al interior del asentamiento como para actuar estratégicamente en la obtención de recursos económicos. Dos años después, El Tambo participó del proceso de institucionalización de la toma: sus dirigentes, liderados por Luis D'Elía, obtuvieron la legalidad de la propiedad de las tierras y se constituyó una cooperativa, llamada Unión, Solidaridad y Organización (USO).

Ya en los '90, esta cooperativa tejió un complejo entramado de redes entre organizaciones de base, compuesto, entre otras, por juntas vecinales, jardines maternales y cooperativas para lograr un mejor acceso a los recursos alimentarios que proporcionaba el estado (Svampa y Pereyra, 2003: 44). En el lapso de 1995-98, el crecimiento y la acumulación de recursos de esta cooperativa fueron importantes: se creó, primero, una Red Alimentaria, luego una Red de Barrios, debido a que varios de éstos se agregaron a la repartición alimentaria y, por último, la FTV. Svampa y Pereyra sostienen que las organizaciones asociadas a esta red lograron un margen de autonomía relativa frente a las distintas autoridades del estado y los diferentes alineamientos políticos combinando tres factores relevantes: primero, la constitución de esas redes entre organizaciones de base y no gubernamentales les permitió gestionar con cierta autonomía la ayuda social por fuera de la red clientelar vinculada al partido Justicialista; segundo, las divisiones intra e interpartidarias y otras interjurisdiccionales fueron aprovechadas para un mejor posicionamiento y negociación en torno de la obtención de recursos; tercero, el fuerte liderazgo comunitario del presidente de la Cooperativa y del asentamiento El Tambo, Luis D'Elía, fue importante para el logro de los otros dos factores (2003: 44).

En relación con estos condicionamientos debe incluirse, también, el modo en que impacta el carácter estructural del desempleo entre los integrantes de estas organizaciones. Es a partir de esta problemática que se establecen los primeros vínculos entre distintas organizaciones del conurbano para formar una comisión de desocupados, con base en La Matanza, en 1997. Es también allí donde toman contacto los dirigentes de El Tambo y de la CTA, que había obtenido reconocimiento gremial poco antes<sup>8</sup>. En ese sentido, si bien la creación de la FTV, el 18 de julio de 1998, contempló en su interior a un diverso conjunto de agrupaciones, la cuestión del desempleo y la forma de organizar y representar a quienes lo padecían constituyó una de las preocupaciones fundamentales de la CTA en el armado de esta federación<sup>9</sup>.

Desde un principio, la FTV fue reconocida en el espacio público-político como una organización piquetera, debido a que entre sus miembros ha habido siempre trabajadores desempleados y sus reclamos han sido por trabajo, o su paliativo en la forma de planes sociales, y la forma de expresarlo ha sido mediante el corte de ruta (piquete). Aunque en varias oportunidades esos cortes se realizaron en distintos puntos del país, los que mayor atención mediática y política concitaron fueron los realizados en La Matanza, sobre la ruta nacional 3. Es que esos cortes, dirigidos por el líder nacional de la agrupación y ya por entonces concejal de La Matanza Luis D'Elía, han sido masivos y ese elevado número de manifestantes fue el rasgo dominante para el éxito de las acciones organizadas por la FTV que ayudaron a su crecimiento y al del propio D'Elía. De esta manera, en La Matanza se encuentra la base mayoritaria de representación y liderazgo de la FTV.

#### *La unidad compleja de un armado complejo*

Del desarrollo anterior puede advertirse un interés predominantemente estratégico en el armado de la FTV. Desde el punto de vista de quienes la formaron, una federación tal les permitía a sus organizaciones incorporarse a una central con una estructura institucional de alcance nacional y reconocida en el espacio público-político. Como consecuencia, por medio de una federación, estas organizaciones trascendían el espacio de negociación y disputa social y política local, circunscripto al gobierno de La Matanza –ocasionalmente, y en última instancia, al gobierno provincial–, a un espacio de negociación de mayor gravitación política, como representantes nacionales de ese tipo de organizaciones sociales de base. Desde el punto de vista de los dirigentes de la CTA, con la creación de la FTV, la Central lograba reunir a una gran cantidad de agrupaciones que no tenían cabida en ninguna otra organización de tercer grado, de manera que podía organizar, representar y conducir a esa heterogénea y creciente militancia de base, en un contexto en el que predominaban los reclamos por el desempleo, la pobreza y la desafiliación social en general.

No obstante, ese complejo conjunto de agrupaciones que formó la FTV quedó rápidamente dividido entre aquellas organizaciones cuyas actividades se limitan a un conjunto de variadas tareas comunitarias en el territorio, dispersas en algunas localidades del conurbano y en distintas provincias del país, y aquellas que responden al sistema de prácticas estructurado en el núcleo de La Matanza, bajo el liderazgo de D'Elía. Así, el tipo de construcción –y la búsqueda de consolidación– de la FTV en el conurbano bonaerense se

distinguió rápidamente de la desarrollada en otras regiones. Esto se debió tanto a las peculiares características del contexto social y político de esa zona de la provincia de Buenos Aires como al estilo de conducción de D'Elía. Aunque este último no ha descuidado el trabajo territorial en su zona de influencia, ha buscado fortalecer la federación por vía de la obtención de recursos desde las agencias del estado, que es condición de posibilidad de aquél. Con lo cual el tipo de negociación llevada a cabo con los gobiernos municipales, provincial y nacional no varió para la dirigencia de la federación pero sí asumió un carácter peculiar que marcó diferencias no sólo puertas adentro de la FTV sino entre ésta y la propia Central. Esto es, el horizonte de construcción y el propio liderazgo de D'Elía están sostenidos en su historia social y política, ligada al asentamiento El Tambo y a las vicisitudes de las relaciones políticas en el conurbano bonaerense, pero ese entramado no abarca a la totalidad de organizaciones que, como coordinador nacional de la FTV, representa. Con o sin FTV mediante, D'Elía y quienes lo secundan reproducen esa capacidad para trabar relaciones fluidas con otras organizaciones de base y/o no gubernamentales para gestionar asistencia directa con cierta autonomía del PJ, y beneficiarse de las continuas divisiones al interior de ese partido o entre éste y otros para obtener recursos<sup>10</sup>. La contrapartida de esta capacidad para construir poder es el límite que el liderazgo de D'Elía tiene con sus bases de representación más directas, en La Matanza: su legitimidad depende de la eficacia para apoderarse de recursos para mantener las actividades cotidianas en los barrios. El hecho que este dirigente haya capitalizado tempranamente su protagonismo social en el juego político es una muestra clara del modo en que un cargo institucional puede facilitar canales de gestión más rápidos para la asistencia directa<sup>11</sup>.

Por lo dicho hasta aquí, no es difícil advertir la asimétrica distribución de poder que hay al interior de esta federación. La diferencia entre el peso político y estratégico del núcleo dirigente y los demás representantes de organizaciones diversas de la FTV se explicita en la escasa gravitación de estos últimos en la federación, en el complejo de relaciones de poder al interior de la CTA y en el juego político de sus respectivas regiones. Dicho contraste al interior de la FTV, refiere, también, al vínculo tejido entre estos dirigentes y los de la propia CTA, puesto que muchos de los miembros de pequeñas organizaciones de la FTV de otras provincias, alejadas de los condicionamientos políticos existentes en el conurbano bonaerense, tienen relaciones más sólidas con representantes de la CTA en general que con los de la FTV en particular. Esta asimetría al interior de la propia FTV se expresa, además, en una despareja distribución de recursos, proporcional al peso político y estratégico mencionado.

Aunque la conformación de la FTV incrementó el peso mismo de la propia CTA en el espacio público-político, también dificultó su consolidación. Esto obedece, por un lado, a la influencia que tiene la tradición social y política de una dirigencia sindical y una dirigencia social urbana a la hora de plantear estrategias y metas de acción en cada organización. En este sentido, desde cada una se reproduce y actualiza aquello que *saben hacer*. Pero también alude, por otro lado, al espacio de cierta autonomía que el dirigente de la FTV ha obtenido en la CTA y que obedece al modo de construcción practicado hasta aquí, con resultados favorables para sus objetivos, pero no siempre vinculados con los de la mayoría de los dirigentes de la Central.

El crecimiento de las bases de la FTV, el impacto político obtenido por varias de sus movilizaciones, las consecuencias institucionales afines a sus reclamos –alimentos, planes sociales, trabajo– y las alianzas y vinculaciones políticas con distintos dirigentes de partidos políticos (Frepaso, Polo Social, PJ) trazadas desde mediados de los '90 hasta nuestros días deben ser puestas en relación con esa autonomía expresada en la figura del dirigente de la FTV. Asimismo, ellas distan bastante de las acciones promovidas por la CTA para la creación de un nuevo movimiento social. En tanto la meta de la Central es la construcción a largo plazo de una herramienta para el cambio social, la de la FTV está ligada en gran medida a la coyuntura. No se trata de sostener, con esto, que sólo la federación establezca alianzas tácticas en función de los réditos que le puedan proporcionar una u otra negociación, aun cuando haya un discurso predominante de los dirigentes de la CTA acerca de los valores morales que deben ligarse a la práctica política. En todo caso, la diferencia es que quienes conducen la CTA las plantean en relación con aquel objetivo a largo plazo, con lo cual sus propias alianzas tácticas se vuelven en contra, en más de una oportunidad, porque resultan de un armado social y político difuso, en el cual la dirigencia de esta organización carece del liderazgo para sostener tales coaliciones.

En suma, mientras la CTA plantea la construcción de un nuevo movimiento como instrumento para la transformación social, la FTV sostiene su construcción en el entramado de redes que le suministren recursos para sobrellevar los procesos de desafiliación social que sus militantes padecen, principalmente en el conurbano bonaerense. En todo caso, si desde la federación se piensa en algún tipo de herramienta, ésta es hija de la coyuntura: bien puede ser la inclusión de miembros en elecciones por cargos político-partidarios, bien puede ser la creación de una colación partidaria para capitalizar el protagonismo social en protagonismo político y quedar así mejor posicionada en la relación de fuerzas dispuesta en el juego político. Esto, desde luego, está ligado al tipo de militancia que cada organización representa y al contexto social y político en el que tiene lugar. Como ya dijimos, varias de las organizaciones sindicales inscriptas en la CTA representan a sectores medios y medios bajos que aún mantienen ciertos niveles de consumo propios de la posición que tradicionalmente ocuparon en la estructura económica y social, mientras que la representación de base típica de la FTV expresa las consecuencias de la polarización y la fragmentación social. Por último, mientras que en la CTA predomina el liderazgo de los estatales y de los docentes, con un estilo de dirigencia orientado a reclamarle al estado nacional (con las limitaciones, implicancias y tiempos que ello tiene), en la FTV predomina el liderazgo vinculado a las propias demandas que una región geográfica y social determinada como La Matanza le impone a los dirigentes sociales y políticos surgidos de ella. En ese entramado complejo, y a veces contradictorio, de organizaciones sociales, cabe preguntarse en qué medida se reconfiguran las identidades sociales y políticas provenientes de distintas tradiciones y creencias y cómo se resignifican (si es que esto ocurre).

Las tensiones entre la CTA y la FTV han estado presentes desde la creación de esta última. Es hora, entonces, de dar paso a dicha cuestión, al modo en que éstas se manifestaron en las coyunturas social y política de 2001-2004 y a las diferencias que emergieron como expresión de aquellas tensiones constitutivas. Puede plantearse, a modo de orientación tentativa de las próximas líneas, el siguiente interrogante. ¿Por qué no se produjo la ruptura entre la CTA y la FTV?

## Tensiones y diferencias

La finalización abrupta y traumática del gobierno de la Alianza ocurrió en un contexto de acelerada depresión económica, alta movilización y crisis de legitimidad<sup>12</sup>. La CTA, que había alentado la creación de esa coalición y la posterior candidatura de De la Rúa-Álvarez en 1999, rápidamente trató de despegarse de aquella, señalando sobre todo su disconformidad con la política económica implementada por el gobierno. Desde 2000 en adelante, la CTA y la FTV lideraron protestas cuyos reclamos fueron, principalmente, contra el desempleo, la pobreza y la indigencia, el ajuste estructural de la economía y la asimétrica distribución de la riqueza que impactaron negativamente en los sectores populares. Pueden citarse, por ejemplo, la Marcha Grande por el Trabajo (julio-agosto de 2000), que buscó lograr un millón de firmas para que fuese tratada en el Congreso la iniciativa de un Seguro de Empleo y Formación para todos los jefas o jefes de familia desocupados, o la marcha del Frenapo (septiembre de 2001) y la posterior realización de esa consulta, a mediados de diciembre de ese año<sup>13</sup>.

Aunque sus resultados fueron positivos, el desenlace de la crisis final del gobierno de De la Rúa, pocos días después de que se efectuara la consulta, corrió del centro de la opinión pública el impacto que había tenido. Así, la CTA no pudo capitalizar –al menos en el espacio público-político– el protagonismo alcanzado por haber organizado, coordinado y liderado la acción política más importante hasta ese momento, que congregó a un complejo conjunto de organizaciones sociales y partidos políticos en una suerte de incipiente unidad, entre distintos actores, tras un único objetivo. Tampoco pudo cristalizar ese protagonismo en el desarrollo de la salida de la crisis política. Se advierte así la distancia existente entre la capacidad de organización de un actor social para impugnar y/o plantear temas para una agenda política y el modo en que esos temas y los actores que los promueven impactan en el juego político. Estas dificultades marcaron el curso de las estrategias y metas de la CTA en el corto plazo; asimismo llevaron a la superficie las tensiones entre CTA y FTV en esa coyuntura.

Se trata de averiguar, entonces, la manera en que se acrecentaron o se debilitaron esas tensiones constitutivas del vínculo entre estas organizaciones desde fines de 2001 hasta mediados de 2004. Para ello, nos concentraremos en tres momentos: el primero, relativo a la crisis de 2001 y la gestión de gobierno de Duhalde; el segundo, vinculado al proceso de participación en las elecciones nacionales de 2003 y su relación con el sexto Congreso Nacional de Delegados de la CTA, en el que se lanzó un nuevo movimiento político; el último, referido al cambio de escenario político, con la asunción de Néstor Kirchner (PJ) a la Presidencia de la Nación.

*Entre la recomposición institucional y la recomposición del “campo popular”*

Los conflictivos meses de 2002 estuvieron condicionados por la recomposición institucional del régimen político de gobierno, el impacto de la devaluación del peso, la cesación de pagos del estado argentino con los organismos de crédito internacionales y el manejo del conflicto social, enmarcado por un ciclo de alta movilización y de fuerte represión

estatal (Pérez y Argelino, 2003). El proceso fue liderado por el partido Justicialista, con la gestión del senador Eduardo Duhalde a cargo de la Presidencia de la Nación.

Ese escenario complicó, en principio, más a la CTA que a la FTV. En el plano político-institucional, predominó la disputa acerca de cómo conducir el proceso hacia las próximas elecciones presidenciales –precipitado por la escalada represiva frente a las protestas piqueteras– y quedó de lado el debate acerca de la modificación de los mecanismos de representación, deliberación, participación y decisión promovidos por la CTA. De ese modo, la Central debió buscar rápidamente la manera de posicionarse frente a la coyuntura y sus reclamos y propuestas quedaron relegados a aquélla. En el plano político-económico, prevaleció la discusión acerca de la salida de la Convertibilidad, la devaluación de la moneda nacional y la cesación de pagos del estado argentino con los organismos de crédito internacionales, en tanto que las demandas de la CTA dirigidas a la modificación de la distribución de la riqueza y a terminar con la pobreza fueron relegadas pese a que una de las consecuencias más negativas de la devaluación fue la drástica reducción del poder de consumo de los sectores asalariados y populares que profundizó la brecha entre quienes más concentran riqueza y quienes menos<sup>14</sup>. La CTA, no obstante, expresó sus diferencias y manifestó sus propuestas al respecto sin obtener réditos políticos importantes<sup>15</sup>. Por último, en el plano político-social, la gestión de Duhalde instrumentó el Programa Nacional Jefas y Jefes de Hogar para paliar la crisis social, que adoptaba algunos de los puntos del Seguro de Empleo y Formación diseñado por la CTA años atrás. Aunque se había planteado un alcance universal para ese plan, su gestión fue implementada como la moneda de cambio que los gobiernos (nacional, provinciales y municipales) entregaron a las organizaciones piqueteras para descomprimir largas jornadas de cortes masivos de rutas y puentes de acceso a la Ciudad de Buenos Aires<sup>16</sup>.

El intercambio complejo entre estas organizaciones y el gobierno estuvo marcado por la represión y/o la entrega de planes sociales, que ahondaron las divisiones al interior del denominado movimiento piquetero, producidas desde mediados de 2001 en adelante<sup>17</sup>. Mientras la FTV y la CCC morigeraron sus protestas y quedaron mejor posicionadas para recibir asistencia, los movimientos autonomistas y otras organizaciones vinculadas a partidos de izquierda radicalizaron sus reclamos y acciones justamente para diferenciarse de aquellas aun cuando compartían el objetivo de sus reclamos: la obtención de planes sociales. Si bien esa situación se volvería negativa para el conjunto de todas las organizaciones, en lo inmediato la FTV aprovechó los beneficios proporcionados por esta negociación: acrecentó sus recursos y fortaleció el liderazgo social de Luis D'Elía y de la FTV al interior del profuso arco de organizaciones piqueteras, y de la propia de CTA.

En ese contexto, la dirigencia de la CTA buscó marcar una frontera con respecto a los actores protagonistas de la recomposición institucional (PJ, UCR, Frepaso, Sociedad Rural, Unión Industrial Argentina, CGT) y a su forma de concretarla<sup>18</sup>. Esto ocurrió durante todo 2002, mediante la realización de una serie de congresos regionales en todas las provincias para debatir la estrategia de la organización frente a la crisis política, económica y social<sup>19</sup>. Esos encuentros culminaron con la celebración del sexto Congreso Nacional de Delegados, a mediados de diciembre, en Mar del Plata (Buenos Aires), donde se estableció construir un nuevo movimiento político y social a partir del trazado de una nueva coalición con otras



organizaciones sociales y políticas para reunificar al “campo popular”, alterar las relaciones de dominación y posibilitar la instauración de un nuevo régimen.

Entre la recomposición institucional y la del denominado campo popular, la celebración de ese Congreso expresó un punto alto de tensión entre CTA-FTV. La situación organizativa de ambas ante ese evento, en Mar del Plata, difería ostensiblemente. La CTA no tuvo el protagonismo esperado en la compleja trama de movilizaciones que marcaron el conflicto social ni supo aprovechar la posibilidad de participar en las pocas instancias de apertura institucional hacia las organizaciones sociales. Por ejemplo, la Central no participó en las reuniones del consejo consultivo nacional porque se opuso al modo en que se venía desarrollando la recomposición institucional del sistema político. La FTV, por el contrario, protagonizó numerosas jornadas de protesta y se desempeñó en los distintos consejos, obtuvo mayores recursos, y mostró el crecimiento cuantitativo de la organización y de D’Elía como dirigente social. Así, mientras que la dirigencia de la CTA buscaba marcar una posición como central de trabajadores en el confuso desarrollo de la crisis, la FTV buscaba obtener réditos de su protagonismo en el complicado escenario del conflicto social. Esto se tradujo en un contraste entre las acciones colectivas de una y otra organización. Esa diferencia de perspectivas y de posicionamientos expresó fuertemente las tensiones entre ambas en el Congreso de Mar del Plata.

*El Congreso, el movimiento, el partido y el barrio como expresiones de una tensión irresoluble*

El Congreso se realizó entre el 13 y el 14 de diciembre de 2002 en Mar del Plata<sup>20</sup>. La consigna presentada fue “Pan, paz, trabajo y democracia” y los núcleos planteados como estratégicos para la salida de la crisis actualizaban demandas de larga data en la historia de la CTA: mayor distribución de la riqueza, ampliación de la democracia para garantizar una mayor participación de los sectores populares y unidad con las centrales sindicales y movimientos sociales del Mercosur y de Latinoamérica. No obstante, una cuestión más concreta e inmediata predominaba entre sus dirigentes: cómo enfrentar las elecciones nacionales de 2003, en las que el PJ se presentaba dividido y varias fuerzas partidarias buscaban retener al impreciso electorado llamado progresista. Una segunda cuestión -no menor- cristalizaría en esos días de resoluciones de estrategias y metas futuras: qué lugar ocuparía en adelante la FTV en la CTA, dada la posición protagónica conseguida en ese año. Las discrepancias en torno al movimiento político, la participación en las elecciones y la representación territorial de la CTA canalizaron, una vez más, las tensiones constitutivas de estas dos organizaciones, entre fines de 2002 y mediados de 2003.

Sobre la representación territorial, la diferencia entre los delegados de la FTV y de otras organizaciones de la CTA se planteó en torno al tipo de representación que debía adoptar la organización territorial de la CTA. Desde la FTV se propuso que la federación fuese la única expresión territorial de la CTA, con el fin de acrecentar su fuerza para negociar las cuotas de asistencia social con el estado en sus distintos niveles. Desde otras organizaciones y sindicatos se sostuvo, por el contrario, que tal propuesta era inviable porque había regiones en las que distintas organizaciones barriales y territoriales estaban inscriptas en la CTA, en algunos casos porque la FTV no estaba conformada todavía, y en otros casos porque la vinculación de esas organizaciones con la federación no era tan

cercana como la que mantenían con la CTA. La propuesta de la FTV deslizaba, soterradamente, la presión de la federación por un mayor control al interior de la CTA puesto que, con esa modificación sustancial, la FTV hubiera pasado a ocupar todos los espacios de representación territorial de la Central, aún en regiones y localidades donde no había sido creada. Ese fue el contrapunto más fuerte durante el Congreso: enfrentó a sus respectivos dirigentes en duras discusiones y hasta puso en duda la unidad dentro de la CTA<sup>21</sup>. Finalmente, en el plenario general de cierre del evento no se aprobó la iniciativa de la FTV sino que se la reconoció como la “expresión barrial” de la CTA y, desde la Central, se dispuso alentar a las distintas organizaciones de su tipo para que confluyeran en la FTV. Esa solución de compromiso permitió el lanzamiento del movimiento político y social.

En efecto, se trataba de la estrategia fundamental de la CTA, considerada la herramienta de cambio social y político necesaria para consolidar la unidad con otros actores sociales, enfrentar la recomposición del sistema político y encontrar una salida a la crisis social y económica. No obstante, el emprendimiento quedaría encerrado en su confusa proposición: la expresión de la necesidad de establecer coaliciones sociales y políticas que permitieran crear las condiciones para construir una experiencia social y política distinta en la Argentina<sup>22</sup>. Víctor De Gennaro, secretario general de la CTA, había adelantado en la inauguración del Congreso que el movimiento no tendría relación con ningún partido político, que la central no se convertiría en un partido sino que mantendría su independencia de aquellos, de las patronales y del estado. El líder de la central reafirmó allí la decisión de no presentar candidaturas a las elecciones nacionales de 2003 por considerarlas fraudulentas<sup>23</sup>.

Pero, a esa altura, las condiciones del escenario político circunscribían a los actores al armado de estrategias y coaliciones para las elecciones nacionales. En ese marco, el lanzamiento del movimiento político quedó signado por las contradictorias interpretaciones que provocó tanto al interior de la Central como fuera de ella, por parte de los demás actores sociales y políticos. Estas contradicciones se debieron, por un lado, a la deliberada imprecisión de su planteo, que supuso tanto el armado de una gran coalición popular como la participación solitaria de dirigentes de la Central en las elecciones de 2003. Por otro lado, las contradicciones se correspondieron con el complejo perfil político-partidario de sus miembros que, desde un comienzo, neutralizó el ascetismo partidario referido por De Gennaro, puesto que varios de sus miembros respondían a identidades partidarias previas. En esa dirección, algunos militantes sostuvieron que el movimiento era la propia CTA, por lo tanto la Central debía designar a un candidato conjuntamente con otros actores sociales y políticos y participar en las elecciones. Otros creyeron que era la condición de posibilidad de la creación de un partido de los trabajadores. Hubo también quienes vieron en el movimiento la posibilidad para conformar frentes con otros partidos a partir de coincidencias con las iniciativas de la Central<sup>24</sup>. Al respecto, un miembro de la FTV-CTA de la provincia de Buenos Aires sostuvo:

“Como no sé el cómo ni la forma ni nada, hay montón de operaciones: desde los que plantean que hay que hacer un partido político -la FTV, en parte, planteó eso- hasta los que dicen, ojo, los partidos ya están hay que meterse en los partidos que ya están. En la CTA hay un gran espectro, planteando la independencia de los partidos políticos pero no planteando que vos no tenés que ser de un partido para estar. En el Congreso no hubo una definición de decir “hay que hacer esto o lo otro”, y a partir de ahí se transitó un

tiempo de bastantes diferencias políticas dentro de la CTA, en donde no había una definición, digamos, del órgano de la conducción que es la Secretaría Nacional y la Mesa Nacional. (Entrevista del autor)

Como no hubo una única definición, surgieron varias de acuerdo con los objetivos, metas y tradiciones políticas de los miembros de las distintas organizaciones. En el caso de la FTV, la masividad y heterogeneidad de su composición y el protagonismo acrecentado durante 2002 llevaron a D'Elía a trasladar esa experiencia de construcción social y territorial a la organización apurada y desprolija de un frente partidario, denominado Frente Cambia Buenos Aires, para postularse como candidato a gobernador por la provincia de Buenos Aires, con resultados paupérrimos<sup>25</sup>. Si bien puede evaluarse, retrospectivamente, esta jugada electoral en relación con el crecimiento de la FTV y la necesidad constante de mantener y ampliar contactos institucionales para agilizar recursos y disminuir las privaciones de gran parte de sus afiliados, lo cierto es que su resultado mostró la distancia que hay entre la candidatura por un cargo legislativo y la candidatura por un cargo ejecutivo en la provincia más poblada del país y en la que el partido predominante –el PJ– retiene aún de su lado a gran parte del electorado de los sectores populares<sup>26</sup>. Un miembro de la FTV-CTA de Franciso Solano (provincia de Buenos Aires) dijo al respecto:

No se transfiere o no se traslada automáticamente lo social a lo político, creemos que es una construcción que tiene que estar unida, no es que lo social va por un lado y lo político va por otro. Vos sos un dirigente social reconocido, bueno, serás también cuestionado, pero digamos, eh... tenés mucho laburo a nivel social, te conoce todo el país pero eso no implica que después te vayan a votar. (...) Nos quisimos pasar de la resistencia, quisimos pasar a una cosa que no estuvimos preparados. Una cosa es resistir la calle, que era el piquete, para tener las reivindicaciones, otra cosa es decir bueno... para qué queremos un cargo. Porque si vos no tenés claro el enemigo, terminás siendo un capanga más de los partidos tradicionales. Y te van a absorber. (Entrevista del autor)

Por el lado de la CTA, distintos miembros participaron también del proceso de elecciones, entre ellos algunos de sus miembros más encumbrados de la Mesa Nacional de la Central, como Marta Maffei (ARI), Ariel Basteiro (Partido Socialista) y Claudio Lozano (Frente para la Victoria), como candidatos a diputados nacionales. Rápidamente quedó atrás la entelequia del movimiento y de la unidad con distintos sectores. Cada sector afiliado a la CTA jugó sus apuestas según su propia escala de preferencias político-partidarias. Por ejemplo, la candidatura de Lozano, figura clave de la dirigencia y de las orientaciones estratégicas de la CTA, al frente de una coalición de organizaciones progresistas vinculadas al gobierno de Kirchner, expresó cuán lejos había quedado de dicha alianza electoral la recurrente intención de “unificar al campo popular”. Manifestó, también, la adaptación –tardía– de la Central ante la disposición del escenario electoral y la contradicción explícita entre el purismo político planteado al momento de lanzar el movimiento y la táctica decisión de tomar parte en la competencia electoral ni bien se advirtió que el mentado movimiento no era más que eso.

En suma, los dirigentes de la CTA y la FTV se manejaron de acuerdo con la estructura de oportunidades políticas abiertas por la coyuntura electoral y establecieron soluciones tácticas que disminuyeron las tensiones existentes entre ambas con vistas a mantener la

unidad de la Central. Pareciera haber una capacidad para advertir los límites de cada agrupación y el impacto que las acciones de cada una pueden ocasionar a la contraria y en el juego político. Una prueba de ello fue la resolución referida a la representación territorial de la FTV que acalló la diferencia de criterios entre los miembros de las organizaciones y descomprimió la tensión constitutiva de distintos colectivos identitarios. En ese evento, que en principio cristalizaría la constitución de una nueva frontera política entre las organizaciones sociales y los partidos políticos tradicionales, quedó al descubierto con dicha resolución la conveniencia por mantener la unidad ante el vértigo de enfrentar divididas un escenario tendencialmente adverso para este tipo organizaciones sociales. Así, las tensiones no desaparecen ni se resuelven. En todo caso, se debilitan en relación con el contexto político en que son puestas a la superficie.

#### *El escenario político con Kirchner*

La gestión de Néstor Kirchner como presidente de la Nación complicó la posición de la CTA y la FTV en el escenario político. El discurso instaurado por el nuevo Presidente y la agenda marcada por su administración le arrebataron a la CTA varios de los reclamos elevados durante estos años, particularmente porque la impronta discursiva de Kirchner se orientó a cuestionar las transformaciones ocurridas durante los '90 en torno del régimen social de acumulación y el régimen político de gobierno. De alguna manera, esa operación discursiva se apropió del contenido contencioso de numerosas acciones de la CTA que le permitieron concebir una identidad colectiva en la década precedente. Así, la iniciativa de restablecer controles estatales en las actividades económicas privadas y la regulación efectiva de los servicios públicos privatizados, junto con la remoción de varios jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la anulación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, la decisión de convertir el edificio de la ESMA en un museo por la memoria de los desaparecidos bajo la última dictadura militar, o la intención de forjar un nuevo proyecto de soberanía nacional, fueron entre otras, algunas de las enunciaciones proclamadas y/o medidas tomadas por Kirchner y bien recibidas por la dirigencia de la CTA y la FTV.

Ha habido, desde luego, una distancia entre ese discurso y la gestión misma de los temas que componen la agenda del gobierno nacional, sobre todo en lo referente al problema de la polarización y la fragmentación social, de la pobreza y la indigencia de amplios conglomerados de los sectores populares. En ese marco, la CTA insistió con su reclamo de una distribución más justa de la riqueza y la generación de nuevas fuentes de trabajo, demandó un manejo más equitativo de las tarifas de los servicios públicos, rechazó el proceso de negociación de la deuda externa con los organismos de crédito internacionales y la falta de medidas claras en torno a la propiedad de los distintos recursos naturales que posee el país. El impacto político de estas acciones no fue contundente, en parte porque coincidieron con la estrategia de desmovilización generalizada que lanzó el Gobierno y que la CTA, y particularmente la FTV, acompañaron<sup>27</sup>. El contraste de esta disposición desmovilizadora con las expectativas de democratización generadas entre distintas organizaciones sociales en torno del régimen político de gobierno desde fines de 2001 comenzó a marcarse, sobre todo, en la Central.

En efecto, a esta organización se le dificultó afrontar el nuevo escenario como un actor político consolidado y enfrentar al Gobierno con una orientación definida de sus objetivos. Esto se debió a que la CTA no pudo trazar una frontera política con la administración de Kirchner como sí lo había podido realizar con Menem y hasta con la Alianza (UCR-Frepaso). Al no poder establecer a este Gobierno como un adversario definido de sus impugnaciones, se redujo ostensiblemente la performatividad política de sus acciones en el espacio público. A ello debe agregarse la confusión de sus estrategias organizativas y de las expectativas de sus dirigentes y miembros, manifestadas sobre todo en la carencia de unidad al interior de la propia organización.

La falta de unidad se expresó, por ejemplo, en la independencia de criterio con que se manejó la FTV respecto de la CTA en esa coyuntura. Como señalamos, el tipo de práctica reproducido por la dirigencia de esta federación tiene horizontes más limitados que una central sindical y el manejo de las vinculaciones y alianzas políticas varía en relación con la supervivencia misma de la organización. Así, la FTV fue una de las primeras y principales beneficiarias de la asistencia directa que el Gobierno expandió y canalizó a estas organizaciones sociales y piqueteras, que ocupaban calles y puentes con marchas y piquetes<sup>28</sup>. Si bien las consecuencias institucionales de esta orientación fueron positivas para la FTV, porque acrecentó sus recursos, el impacto político fue negativo para la federación y hasta para la propia CTA. Lo fue al interior de la Central porque aumentó la discrepancia entre los distintos actores que la componen. De esta manera, se profundizó la distancia entre los dirigentes sindicales, predominantes en la Central, y entre los dirigentes de las organizaciones sociales afiliadas a ella. Las diferencias entre estos actores comenzaron a expresarse por fuera de la Central, en el espacio público-político. Quedaron manifestadas la falta de unidad que se había expresado en el congreso de delegados de fines de 2002 y las limitaciones de la CTA para consolidarse como una alternativa a la CGT, autónoma de los partidos políticos y del estado, de acuerdo con lo expresado en su estatuto fundador.

En ese sentido, en abril de 2004, poco antes del primer aniversario de la gestión de Kirchner, la CTA realizó un Consejo Federal (Confederal), para aunar criterios, estrategias y metas entre las organizaciones componentes. Asimismo, se buscaron establecer acuerdos mínimos al interior de la CTA frente a la coyuntura abierta por el gobierno de Kirchner, dado que varios de sus miembros estaban estableciendo vínculos políticos cada vez más sólidos con funcionarios del Gobierno y hasta con el propio Presidente. La justificación oficial del evento fue que se acordarían y establecerían propuestas organizativas para intervenir en el juego político “en los próximos años”. Los puntos de acuerdo planteados fueron aquellos por los cuales se unieron hace ya unos cuantos años actores diversos en esta Central: a) distribución de la riqueza para terminar con la desocupación, la pobreza y la desigualdad; b) autonomía nacional para consolidar un nuevo proyecto productivo; c) profundización del proceso de democratización para garantizar en esta etapa política la soberanía popular<sup>29</sup>.

La realización de ese Confederal debe ponerse en relación con las opiniones divergentes que surgieron al interior de la CTA, respecto del escenario político establecido desde mayo de 2003 en adelante. En medio de ese escenario cobraron notoriedad las distintas orientaciones político-partidarias afiliadas a la Central y las propias diferencias surgidas entre aquellos miembros con una larga experiencia de militancia sindical y con una honda huella identitaria marcada por la tradición política del peronismo. Estas discrepancias

se registraron, además, en el modo en que el movimiento político fundado por la CTA debía incluirse en esa coyuntura. Para algunos de sus dirigentes, Kirchner no promovería los cambios necesarios para disminuir la desigualdad, la fragmentación y la polarización social, porque su gobierno fue la expresión de la moneda de cambio que entregaron los sectores beneficiados con la devaluación y la salida exportadora para recomponer la autoridad política del sistema representativo. En esa línea, entonces, no habría espacio para incluir en el proceso de recomposición a las organizaciones sociales. Para otros miembros, en cambio, la gestión de Kirchner estaba en disputa entre los sectores dominantes y los populares y, por ello, las organizaciones sociales y populares debían unirse y apoyar su gestión de gobierno<sup>30</sup>.

Sin embargo, a pocos meses de la realización de ese encuentro, las propuestas en común quedaron en un segundo plano y, en su lugar, cobró notoriedad una nueva y más definida apuesta política por parte de algunos miembros de la CTA. En efecto, el disparador de esa última orientación fue la creación de un Frente Nacional y Popular de militantes gremiales y sociales para acompañar a Kirchner, en el contexto de una puja al interior del PJ entre el núcleo reducido de leales políticos al Presidente y el conjunto mayoritario de los aparatos provinciales del partido Justicialista, con la presencia predominante de Duhalde y el aparato de la provincia de Buenos Aires. Dicho Frente estaba en relación con una táctica de construcción política que Kirchner alentó desde el comienzo de su gestión: el tejido de alianzas y la promoción de candidaturas de distintos dirigentes de partidos de centroizquierda en algunas provincias y en la Capital Federal que permitiera forjar un espacio de apoyos políticos por fuera del PJ. A dicho espacio se lo denominó *transversalidad*<sup>31</sup>. Defensores de la constitución del espacio transversal, los fundadores del Frente argumentaron que éste se había constituido para incorporarse a aquél espacio y dar “base social” al Gobierno, acorde con los lineamientos del movimiento político lanzado por la CTA<sup>32</sup>. Entre los organizadores del Frente se destacaron dos miembros de la CTA: Luis D’Elía, de la FTV, y el secretario de organización de la CTA Nacional, Edgardo Depetri, quien poco antes había lanzado el Frente Transversal Nacional y Popular.

Al poco tiempo, dicho Frente dejó ver que su construcción se limitaba a gravitar en el escenario político conforme con el armado de una estrategia de acumulación de poder de Kirchner frente a las elecciones legislativas de 2005, en las cuales el Presidente buscaría plebiscitar su gestión de gobierno y capitalizarla en cuotas de poder dentro de las estructuras del sistema representativo. Así quedó de manifiesto con el lanzamiento del Frente Patria para Todos (FPT), en diciembre de 2004. Bajo esa denominación, un conjunto heterogéneo de funcionarios nacionales, legisladores y miembros de diferentes procedencias partidarias y dirigentes sociales establecieron –al menos el nombre de– una nueva agrupación política para respaldar expresamente a Kirchner, en consonancia con la voluntad presidencial de expandir alianzas político-electorales por fuera de la estructura orgánica del PJ en diferentes distritos nacionales.

De este modo, la referencia al movimiento político de la CTA como justificación de la creación de esta fuerza no hizo más que reforzar su deliberada maleabilidad programática. En consecuencia, la potencialidad del movimiento político trazado formalmente en el Congreso de Delegados, dos años antes, como el evento político destacado de la CTA para protagonizar la coyuntura, fue desactivada concretamente. En su lugar, proliferaron las alianzas tácticas de dirigentes y miembros de distinto rango de las organizaciones inscriptas

en la CTA con funcionarios gubernamentales. El contraste de estas expectativas individuales con los objetivos organizativos evidenció la distancia existente entre los distintos alineamientos electorales de sus miembros y la meta consistente en crear una herramienta política para el cambio social.

### **Palabras finales**

En el marco del escenario político salido de la crisis de 2001 se estructuraron una serie de condiciones que posibilitaron la expresión de organizaciones populares. No obstante, el espacio de oportunidades políticas abierto para estos actores se vio reducido en la medida que se acentuaba el proceso de recomposición institucional.

Luego del período de elecciones de 2003, las instituciones representativas del sistema político fueron ocupadas mayoritariamente por las fuerzas partidarias tradicionales y, en algunos casos, por sus protagonistas más conocidos. Si bien hubo algunas excepciones que fueron aprovechadas, entre otros, por integrantes de la CTA, por lo visto en estas páginas queda claro que los beneficios individuales difícilmente puedan traducirse en términos organizativos a la CTA.

Con el comienzo de la presidencia de Kirchner se abrieron ciertos canales institucionales e instancias de diálogo para las agrupaciones sociales. En el caso de la CTA, por ejemplo, la inclusión de sus miembros en el Consejo del Empleo, la Productividad y el Salario les permitió participar de la deliberación junto con organizaciones corporativas tradicionales como la CGT o la Unión Industrial Argentina (UIA). Aunque el gesto oficial de invitar a la Central a esa mesa de concertación buscó otorgarle amplia representatividad a ese Consejo, aun cuando la Central carece de personería gremial, la legitimidad de dicho evento quedó reducida por dos motivos: por un lado, la instancia resolutoria se pospuso en varias ocasiones, dadas las diferencias respecto del monto salarial básico sobre el que se negociaba; por el otro, en forma superpuesta con la formalidad y representatividad del Consejo, hubo reuniones entre representantes de la CGT y de la UIA, en el ministerio de Trabajo, para agilizar los acuerdos que en aquel foro se trababan por los distintos puntos de vista en pugna. De esta manera, la CTA fue desplazada del ámbito de las negociaciones en torno de la representación de intereses y vio esfumarse una gran oportunidad política que podría haber colaborado en el proceso hacia la obtención de la personería gremial de la organización.

Esto muestra la parálisis política de la CTA. Se observa, por un lado, los límites que encuentra en el juego político-corporativo para gravitar en el proceso de toma de decisiones estrictamente sectorial, influido por la carencia de los elementales instrumentos legales que habilitarían jurídicamente su participación en estas instancias. Se sabe: en esas mesas de negociaciones entre representantes patronales y sindicales se juega el peso corporativo –y por tanto, político– de dichos dirigentes y de sus organizaciones. Si los representantes de la CTA son desplazados de hecho de ese juego de negociaciones y decisiones, la posición política de la organización se debilita fuertemente porque pierde espacio para ejercer aquello que, en principio, justifica su participación en el juego: la representación de intereses.

A ello se suma, por otro lado, un aspecto constitutivo de la expansión de la CTA pero que limita su afianzamiento político y que justifica gran parte de este trabajo: su amplitud en términos del tipo de actor al cual representa. Allí emergen las tensiones presentadas en estas líneas, entre organizaciones sociales, como la FTV, y sindicales, como las fundadoras de la CTA. Los límites se observan en la medida que la agregación variada de actores diversos convierten a la Central en un híbrido entre una organización sindical y una organización social sin metas políticas definidas. Este rasgo bifronte de la CTA está explícitamente trazado entre los aspectos novedosos de su estatuto: por un lado, la inserción de estas agrupaciones sociales en una organización de tercer grado como la Central, y por otro, como consecuencia del primero, la vocación movimientista de aglutinar a sectores diversos para construir una herramienta de cambio social. En esta dirección se han orientado las expectativas de los dirigentes de la CTA, desde su fundación: acrecentar la organización, ampliar la participación social y política de los sectores trabajadores y populares en el sistema político, y modificar la situación asimétrica de la distribución de la riqueza en el país.

La CTA ha tenido siempre buenos resultados a la hora de objetar el tipo de participación política existente en el sistema representativo. Distintos han sido los resultados referidos a la construcción de una herramienta para el cambio social, entre otras razones porque han entrado en conflicto las diferentes expectativas de los distintos miembros que han hecho de la CTA una organización numéricamente importante en poco más de diez años. La configuración de dicha herramienta pone al descubierto la división notoria entre los intereses y objetivos de los actores protagonistas respecto del corto y el mediano plazo. Eso fue lo que expresó la confusa recepción del lanzamiento del movimiento político, a fines de 2002, por parte de los distintos dirigentes de la CTA. En medio de una profunda crisis política, la apuesta al largo plazo –como el diseño de un proyecto semejante– quedó atrapada en la urgencia que la coyuntura le imprimía a estos actores.

La administración de Kirchner, por último, terminó por dificultar el proceso de afianzamiento político de esta organización. Esta gestión de gobierno implicó una movida de piezas en el tablero complejo de los protagonistas políticos que debilitó tanto la impugnación de esta organización a dicha administración como la impronta por protagonizar una etapa de cambio. La CTA quedó descolocada frente al liderazgo de Kirchner, liderazgo que antes de afinzarse al interior del partido que lo depositó en la presidencia de la Nación, se asentó en el fragmentado conjunto de organizaciones sociales a las cuales la CTA buscó coordinar.

En esa coyuntura, la FTV y su líder fueron rápidamente convocados para sumarse al proyecto de legitimación del liderazgo político que Kirchner proponía. La respuesta de D'Elía fue inmediata y explícita. En cambio, la dirigencia mayoritaria de la CTA mostró su desorientación: algunos se alistaron detrás de Kirchner, otros le plantearon cuestionamientos y hasta hubo quienes desearon desde un principio su gestión. En medio de esa indefinición organizativa, la figura del líder de la Central, Víctor De Gennaro, sufrió un proceso de opacidad importante. Y ése es un aspecto que la CTA debe resolver por estos años: qué lugar ocupará finalmente el líder de la organización en el escenario político de los próximos años. Para toda empresa política movimientista, el protagonismo de su líder, su conductor, es fundamental. Y eso, en el período de recomposición institucional y de los sectores populares en la Argentina de principios de siglo XXI, estuvo ausente en la CTA.



## Bibliografía

- AA.VV. 1995 *Peronismo y Menemismo. Avatares del populismo en la Argentina* (Buenos Aires: El Cielo por Asalto).
- Aboy Carlés, Gerardo 2001 *Las dos fronteras de la democracia argentina* (Rosario: Homo Sapiens).
- Armellino, Martín 2005 “Resistencia sin integración: protesta, propuesta y movimiento en la acción colectiva sindical de los '90. El caso de la CTA”, en Naishtat, Francisco, Schuster, Federico, Nardacchione, Gabriel y Pereyra, Sebastián (comps.) *Tomar la palabra. Estudios sobre protesta social y acción colectiva en la Argentina contemporánea* (Buenos Aires: Prometeo).
- Auyero, Javier 2001 *La política de los pobres. Las prácticas clientelistas del peronismo* (Buenos Aires: Manantial).
- Basualdo, Eduardo 2002 *Sistema político y modelo de acumulación en la Argentina* (Bernal: FLACSO, IDEP, Universidad Nacional de Quilmes).
- Basualdo, Eduardo 2003 “Las reformas estructurales y el Plan de Convertibilidad durante la década de los noventa. El auge y la crisis de la valorización financiera”, en *Realidad Económica* (Buenos Aires) N° 200, noviembre-diciembre.
- Calvo, Dolores 2003 “Organización política auto-referenciada en sectores populares. El caso de la Federación de Tierra, Vivienda y Hábitat”, Informe de investigación (Buenos Aires: CLACSO-Asdi).
- Castel, Robert 1997 *Las metamorfosis de la cuestión social* (Buenos Aires: Paidós).
- Gerchunoff, Pablo, y Juan Carlos Torre 1996 “La política de liberalización económica en la administración de Menem”, en *Desarrollo Económico*, vol. 36, N° 143, octubre-diciembre (Buenos Aires).
- Giddens, Anthony 1982 *Profiles and critics in social theory* (London: Macmillian Press).
- Giddens, Anthony 1993 (1976) *Las nuevas reglas del método sociológico* (Buenos Aires: Amorrortu).
- Giddens, Anthony 1998 (1984) *La constitución de la sociedad*, (Buenos Aires: Amorrortu).
- Gurrera, María Silvana 2003 “Sindicalismo, identidades políticas y conflicto social: la conformación de la Central de los Trabajadores Argentinos (CTA) en los años noventa”, Informe de investigación (Buenos Aires: CLACSO-Asdi).
- Merklen, Denis 1991 *Asentamientos en La Matanza. La terquedad de lo nuestro* (Buenos Aires: Catálogos).
- Murillo, M. Victoria 2001 *Labor Unions, Partisan Coalitions, and Market Reforms in Latin America* (New York: Cambridge University Press).
- Nun, José 1989 *La rebelión del coro* (Buenos Aires: Nueva Visión).
- OSAL, 1999a, 1999b, 2000a, 2000b, 2001a, 2001b, 2002a, 2002b, 2003a, 2003b, 2004a. Observatorio Social de América Latina N° 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Buenos Aires: CLACSO.
- Palermo, Vicente y Novaro, Marcos 1996 *Política y poder en el gobierno de Menem* (Buenos Aires: Norma).
- Palomino, Héctor 1995 “Quiebres y rupturas de la acción sindical: un panorama desde el presente sobre la evolución del movimiento sindical en la Argentina”, en Acuña, Carlos (comp.) *La nueva matriz política argentina*, (Buenos Aires: Nueva Visión).

Pérez, Germán; Martín Armelino y Federico Rossi 2003 “¿Autogobierno o Representación? La experiencia de las asambleas en la Argentina”, en *Revista de Ciencias Sociales*, N° 14 – Universidad Nacional de Quilmes (Bernal).

Rauber, Isabel 1998 *Una historia silenciada* (Buenos Aires: Pensamiento Jurídico Editora).

Rauber, Isabel 2000 *Tiempo de herejías* (Buenos Aires: Instituto de Estudios y Formación – CTA).

Schorr, Martín 2004 *Industria y nación. Poder económico, neoliberalismo y alternativas de reindustrialización en la Argentina contemporánea* (Buenos Aires: Edhasa) Capítulo Final

Schuster, Federico et al 2002 *La trama de la crisis. Modos y formas de protesta social a partir de los acontecimientos de diciembre de 2001*, Instituto de Investigaciones Gino Germani, FCS-UBA, (Buenos Aires).

Schütz, Alfred 1995 (1962) *El problema de la realidad social* (Buenos Aires: Amorrortu).

Svampa, Maristella (ed.) 2000 *Desde abajo. La transformación de las identidades sociales* (Buenos Aires: Biblos-UNGS).

Svampa, Maristella y Sebastián Pereyra 2003 *Entre la ruta y el barrio. La experiencia de las organizaciones piqueteras* (Buenos Aires: Biblos).

Tarrow, Sidney 1997 *Poder en movimiento. Los movimientos sociales, la acción colectiva y política* (Madrid: Alianza).

Tilly, Charles 1978 *From Mobilization to Revolution* (New York: McGraw-Hill Publishing Company).

Torre, Juan Carlos 2004 *La operación política de la transversalidad. El presidente Kirchner y el partido Justicialista* (Texto revisado de la intervención en la Conferencia “Argentina en Perspectiva”, organizada por el Centro de Estudiantes de la Universidad T. Di Tella, noviembre. Mimeo).

#### **Fuentes secundarias**

Central de los Trabajadores Argentinos 1996 *Estatuto*.

Central de los Trabajadores Argentinos 2002 *Construir la unidad del campo popular* (Buenos Aires: Documento).

Central de los Trabajadores Argentinos 2004 *Confederal de la CTA* (Buenos Aires: despacho político).

Encuentro de organizaciones y dirigentes sindicales 1991 *Debate para la organización de los trabajadores* (Buzaco: Documento, 17 de diciembre).

Encuentro sindical 1992 *Hacia el Congreso de los Trabajadores Argentinos (CTA)* (Rosario: Documento, 4 de abril).

Frente Nacional Transversal y Popular 2004 *Nuevos militantes gremiales y sociales de la Argentina* (Buenos Aires: Documento)

Instituto de Estudios y Formación (IDEF-CTA) 2003 *El desmantelamiento del modelo neoliberal y la construcción de una alternativa. Un examen en base a la presente coyuntura* (Buenos Aires).

Lozano, Claudio; Raffo, Tomás 2004 *Pobreza e indigencia. Mapa actual, evolución reciente y tendencias* (Buenos Aires: IDEF-CTA).

#### **Notas**

\* Licenciado en Ciencia Política (UBA), becario del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y docente de la Facultad de Ciencias Sociales (UBA). Becario Clacso-Asdi. Instituto de Investigaciones Gino Germani (FCS-UBA). Actualmente, está realizando su Doctorado en Ciencias Sociales, en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires.

<sup>1</sup> Tomamos su artículo “Algunas exploraciones teóricas en torno a las transiciones democráticas”, aparecido en su libro *La rebelión del coro* (1989).

<sup>2</sup> Giddens se refiere al saber mutuo como “los esquemas interpretativos mediante los cuales los actores constituyen y comprenden la vida social en tanto provista de sentido” (1997: 142). Este saber denota en términos amplios aquello que los agentes de una interacción presuponen se da por sentado recíprocamente, de manera que esto permita sostener acuerdos previos, y crear nuevos. Es importante destacar que Giddens distingue el saber mutuo de lo que llama “sentido común”. Con este último, se refiere a “un cuerpo más o menos articulado de saber teórico, invocado para explicar por qué las cosas son lo que son u ocurren como ocurren, en el mundo natural y en el social. Las creencias de sentido común apuntalan en general el conocimiento mutuo aportado en cualquier encuentro por los participantes” (1997:142). El término saber mutuo está en deuda, fuertemente, con la noción de “tipificación” trabajada por Alfred Schütz. Ver, al respecto, el capítulo 2 de *Las nuevas reglas del método sociológico* de Giddens (1997), y sobre tipificación, del propio Schütz, *El problema de la realidad social* (1962).

<sup>3</sup> Giddens define a las *reglas* como aquellas relaciones que gobiernan las prácticas sociales, permitiendo la constitución de un sentido, por un lado, y la sanción de modos de conducta social, por el otro; y a los *recursos* como las formas por las que la capacidad de actuar de otra manera de los agentes impacta en la producción y reproducción de prácticas sociales y permite la integración de dichos cambios en éstas. Esto, como se verá enseguida, influye en las relaciones de poder entre los actores sociales.

<sup>4</sup> Sobre el proceso de reformas ver, entre otros, Basualdo (2002), Gerchunoff y Torre (1996), Palermo y Novaro (1996).

<sup>5</sup> Luego de la realización de un congreso nacional, en el Luna Park de Buenos Aires, en 1996, donde habían reunido a más de 8.000 delegados, se decidió que el Congreso se definiera en adelante como una nueva central de trabajadores. Este cambio en la denominación se vio legitimado, un año más tarde, con el reconocimiento institucional de parte del gobierno de Menem, al permitir su inscripción gremial, y la posterior celebración de elecciones nacionales, por primera vez en la corta historia de la organización. No obstante, la CTA carece aún de personería gremial, que es fundamental para toda agrupación sindical en lo referido a la negociación colectiva por aumentos salariales, por cargas sociales de los trabajadores, o por fuentes de trabajo. Sobre la reconstrucción histórica de la CTA, ver Rauber (1998) y (2000), Gurrera (2003) y Armelino (2005). Para evitar confusiones, siempre se llamará a esta organización como la CTA.

<sup>6</sup> Los documentos de los Encuentros Sindicales de Burzaco, a fines de 1991, y de Rosario, a principios de 1992, aludían a este tipo de construcción social y política.

<sup>7</sup> Para la reconstrucción del asentamiento El Tambo, seguimos a Merklen (1991), para tratar el desarrollo de la FTV, seguimos a Svampa y Pereyra (2003). Para un detenido tratamiento de las relaciones de sociabilidad al interior de la FTV, ver Calvo (2003)

<sup>8</sup> Señalan Svampa y Pereyra: “La CTA se encuentra entre las primeras organizaciones que percibió la potencialidad organizativa de los desocupados. (...) percibió tempranamente el

proceso de inscripción territorial de las clases populares, como bien lo resume la consigna 'La nueva fábrica es el barrio'. No por casualidad encabezó las primeras tentativas organizativas de 'sindicalizar' al sector, a través de encuentros y congresos de desocupados, primero en Neuquén, en 1996, poco antes de los hechos de Cutral-Co, y luego en La Matanza, en 1997" (2003: 40).

<sup>9</sup> Entre los distintos grupos que la componen –algunos más organizados que otros– figuran trabajadores rurales sin tierra de distintas regiones del país, descendientes de los pueblos originarios, inquilinos y ocupantes, habitantes de las villas y asentamientos que se formaron en las grandes ciudades fabriles e industriales como Córdoba, Rosario, y fundamentalmente en el conurbano bonaerense.

<sup>10</sup> Escapa a los límites del trabajo dar cuenta de esta compleja cuestión acerca de los modos en que se canaliza la asistencia social directa, particularmente en el conurbano bonaerense. Baste decir que el PJ tiene una efectiva red de miembros que reproducen y actualizan prácticas clientelares en las zonas más carenciadas de este conurbano. Esto favorece el liderazgo de miembros de ese partido, entre intendentes, concejales y diputados provinciales en detrimento de la constitución de redes más autónomas para la resolución de este tipo de problemas. Para un desarrollo mayor, ver Auyero (2001).

<sup>11</sup> D'Elía fue concejal por La Matanza (Frepasso, 1997-99), diputado provincial (Frente para el Cambio, desde 1999) y compitió en las elecciones para gobernador de la provincia de Buenos Aires en 2003 (Frente Cambia Buenos Aires).

<sup>12</sup> Sobre la crisis de 2001, en relación con distintos actores sociales, ver entre otros, Schuster et al (2002), Pérez, Armelino y Rossi (2003), y OSAL, 1999a, 1999b, 2000a, 2000b, 2001a, 2001b, 2002a, 2002b)

<sup>13</sup> La marcha del Frenapo comenzó, en septiembre de 2001, con siete caravanas que partieron desde la Plaza del Congreso de la Nación hacia varias ciudades del país para difundir la consulta popular, prevista para el 10 de diciembre de ese año, en la que se votaría la creación de un Seguro de Empleo y Formación. La iniciativa apuntaba a combatir la pobreza con la implementación de ese seguro. La consulta popular se realizó, finalmente, entre el 14 y el 17 de diciembre. Además de la CTA, participaron dirigentes políticos que confluyeron en el ARI, organizaciones de pequeños y medianos empresarios (APyME), de derechos humanos (CELS, Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora) y distintos miembros de las iglesias y denominaciones católica, judía y protestante. Se registró un total de 3.106.681 votos, de los cuales 3.083.191 fueron por el sí, 17.878 por el no, 3051 en blanco y 2561 anulados. Datos recogidos de la Secretaría de Prensa de la CTA.

<sup>14</sup> Ver, entre otros, Basualdo (2003), y Schorr (2004). También, los trabajos del IDEF "El desmantelamiento del modelo neoliberal y la construcción de una alternativa. Un examen en base a la presente coyuntura" (julio de 2003) y "Pobreza e indigencia. Mapa actual, evolución reciente y tendencias" (Lozano-Raffo, abril de 2004).

<sup>15</sup> El 29 de mayo de ese año, por ejemplo, la CTA convocó a un paro activo contra la política económica del gobierno de Duhalde y el rechazo al plan que promovía el FMI para conducir la salida del default argentino. Se realizaron actos, piquetes, tomas y marchas de distintos gremios y organizaciones nucleados a la Central, y se sumaron agrupaciones estudiantiles y empresarias a la jornada. Ver *Página 12, Clarín, La Nación* (30 de mayo de 2002). Otra acción contundente fue la jornada nacional de protesta, el 20 de septiembre, en la que la CTA y la CCC realizaron una marcha, con la adhesión de otras organizaciones y partidos políticos opositores, reclamando el "que se vayan todos". La jornada finalizó con una fuerte

represión y una numerosa cantidad de manifestantes presos. Ver *Página 12, Clarín, La Nación* (21 de septiembre de 2002).

<sup>16</sup> Esto ocurrió aún cuando el plan contó con la disposición de consejos consultivos municipales para descentralizar y controlar la gestión de este tipo de asistencia. En estos consejos participaron organizaciones sindicales, empresarias, sociales y confesionales. Se formó, también, un consejo consultivo nacional, del cual no participó la CTA, pero sí la FTV. De ese modo, ésta capitalizó públicamente su incorporación a la “mesa de diálogo” entre distintos actores sociales y el gobierno, y concretamente retuvo el manejo de los planes.

<sup>17</sup> Para un desarrollo de las diferencias y distanciamiento de las organizaciones piqueteras, ver Svampa y Pereyra (2003).

<sup>18</sup> Utilizamos la noción de frontera a partir de Aboy Carlés. El autor sostiene: “(una frontera política) es el planteamiento de una escisión temporal que contrasta dos situaciones diferentes: la demonización de un pasado, que se requiere aún visible y presente, frente a la construcción de un futuro venturoso que aparece como la contracara *vis à vis* de ese pasado que se pretende dejar atrás.” (Aboy Carlés, 2001: 170)

<sup>19</sup> Concretamente, lo que se debatió fue un documento preparado por la Mesa Nacional, titulado “Construir la unidad del campo popular”.

<sup>20</sup> Se establecieron siete comisiones: “Tácticas y Estrategia de la Central”, “Organización y Gremiales”, “Administración y Finanzas”, “Comunicación”, “Investigación y Formación”, “Derechos Humanos y Criminalización de la protesta social” e “Internacional”. Esta última tenía a su vez cuatro subcomisiones: Migraciones, Argentinos en el Exterior, Foro Social Mundial y ALCA. En ellas se discutieron los distintos temas planteados para su votación en el plenario general del congreso.

<sup>21</sup> “Si todos nos comemos eso del unicato de la FTV, fue para no poner al Congreso en una situación de debilidad para sacar el Movimiento político y social. Si no había un acuerdo y no me comía ese sapo, el Movimiento Político salía con la tribuna vacía de la FTV, podía salir con quilombo sin que todos aplaudiéramos al Movimiento, que era la definición de fondo que necesitábamos.” (Miembro de la Mesa Nacional de la CTA. Entrevista del autor)

<sup>22</sup> Ver el documento “Construir la unidad del campo popular”.

<sup>23</sup> Los dichos del dirigente referían, de ese modo, al documento recién mencionado. “Construir la unidad del campo popular”.

<sup>24</sup> A modo ilustrativo, la confusión se expresó en la cobertura del evento realizada por distintos diarios. *Página 12*, por ejemplo, en su edición del día posterior al cierre del Congreso (15 de diciembre de 2002), tituló en tapa “El sueño del PT propio”, y tituló la crónica “Una convocatoria para crear un movimiento”, y *La Nación* tituló “La CTA será un movimiento político”.

<sup>25</sup> D’Elía obtuvo en toda la provincia de Buenos Aires 43.834 votos (0.76%), y en La Matanza obtuvo 8.317 votos (1.90%). Fuente: Ministerio del Interior de la República Argentina, Elecciones 2003, [www.mininterior.gov.ar](http://www.mininterior.gov.ar).

<sup>26</sup> Un miembro de la CTA, que anteriormente lo había sido de la FTV, dijo al respecto: “Habría que ver si el voto progresista es lo de Luis (D’Elía), si no es un voto más parecido al PJ.”

<sup>27</sup> Una de las acciones contenciosas que la CTA produjo para obtener impacto político fue la convocatoria para el 11 de mayo de 2004 a una jornada nacional con movilizaciones y actos. La jornada careció del impacto político de otrora. Hubo críticas a los grupos económicos y en menor medida al gobierno. Frente al Congreso de la Nación, De Gennaro reclamó la puesta en marcha de mecanismos de participación democrática para implementar el cambio y el

debate en la Cámara de Diputados de varios proyectos de ley presentados para mejorar la desigualdad social. Condenó también el proceso de negociación de la deuda externa y exigió el cuidado de la propiedad de los recursos naturales. Por último, pidió la libertad sindical y el desprocesamiento de los militantes sociales procesados por protestar contra el modelo neoliberal. D'Elía, quien habló primero, dijo que se trataba “de un gobierno en disputa y no es momento de que los referentes del campo popular nos pongamos en fiscales, sino que debemos acumular fuerzas para enfrentar a quienes desvalijaron el país.” (*Página 12*, 19 de mayo de 2004)

<sup>28</sup> A lo largo de todo el año 2004, la prensa gráfica en general marcó el acercamiento o alejamiento de las organizaciones piqueteras al Gobierno. A aquellas organizaciones como la FTV, que explícitamente se alistaron bajo las directivas gubernamentales, se las denominó “blandas”, “oficialistas”, o “dialoguistas”.

<sup>29</sup> Ver el despacho político del *Confederal de la CTA* (16 de abril de 2004).

<sup>30</sup> Hallamos este tipo de opiniones en las entrevistas realizadas tanto a miembros de la FTV, como a miembros de otras organizaciones inscriptas en la CTA, incluso a algunos dirigentes de esta última.

<sup>31</sup> Según Torre (2004), la transversalidad ha sido trazada con la intención de incorporar a sectores de la izquierda peronista y no peronista marginales a las estructuras del PJ al proyecto político de Kirchner. El autor sostiene que esa operación fue orientada por dos objetivos: el primero, que está en línea con el planteado por nosotros, consistió en dotar al Presidente “de recursos partidarios propios para compensar el déficit de apoyos organizados que exhibió al llegar al gobierno. (...) El segundo objetivo fue más ambicioso y consistió en utilizar a los sectores de la izquierda peronista y no peronista para impulsar una transformación del PJ, desplazando las ramas viejas del aparato partidario y promoviendo un viraje hacia la izquierda, congruente con las credenciales setentistas levantadas por el presidente Kirchner.” Esta empresa, señala el autor, se constituyó a su vez a la luz de tres rasgos presentes en este partido: su débil institucionalidad organizativa, su flexibilidad programática y su “agnosticismo ideológico”. Así, las operaciones de este tipo pueden variar y adaptarse a las condiciones de la coyuntura y del proceso político, o ser dejadas de lado rápidamente, como ocurrió con la transversalidad desde fines de 2004 en adelante.

<sup>32</sup> Fue ésa la razón predominante, entre los dirigentes de la CTA y de la FTV que participaron de la creación del Frente, para justificar sus vinculaciones con el Presidente de la Nación y algunos funcionarios de su gobierno. (Documento “Frente Nacional Transversal y popular. Nuevos militantes gremiales y sociales de la Argentina”). Ver, también, *Página 12* (9 de junio de 2004).